

ECONOMÍA Y FINANZAS

TRANSFORMACIÓN SOCIAL ECOLÓGICA EN COSTA RICA

Implicaciones sociopolíticas y económicas del covid-19

Henry Mora Jiménez
Laura Rivera Alfaro¹
Setiembre 2020



El futuro se presenta con escenarios amenazadores e inciertos, se agudizan diversas crisis del modo de producción en particular y de la modernidad en general, a raíz de la actual crisis sanitaria y las tendencias hegemónicas en la gestión de dicha crisis que afectan la economía, los derechos y la vida de las personas.



En este contexto, la articulación entre múltiples actores es un imperativo impostergable. La agenda nacional para la transformación social ecológica de la economía ha sido construida con representantes de diversos colectivos y movimientos sociales y políticos que aportan sus visiones y agendas específicas para la puesta en común de sus reivindicaciones y propuestas.



¹ Se reconoce el apoyo de Cristopher Meza Sánchez, politólogo, quien apoyó en el registro, sistematización y análisis de la información para la construcción de la agenda.

Índice de contenidos

I.	EL CONTEXTO DE CRISIS ECONÓMICA Y SOCIAL COVID-19	4
II.	IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS Y DE GÉNERO COVID-19	5
III.	EL MUNDO QUE SE VISLUMBRA POSCOVID-19	11
IV.	ESCENARIOS SOCIOPOLÍTICOS Y ECONÓMICOS POSCOVID-19	13
A	Agenda conservadora regresiva.....	13
	Lo laboral	13
	Lo ambiental	14
	Lo institucional	14
	La convivencia democrática	14
	Los derechos humanos	15
	La hegemonía cultural	15
B	Agenda conservadora regresiva con reformas	15
C	Transformación social ecológica de la economía	15
	Sustitución del PIB como objetivo de política económica.....	16
	Reducción de la huella ecológica	16
	Reducción del índice de Gini	16
	Mantenimiento de un piso de inversión social	17
	Priorizar el trabajo digno y el empleo decente (OIT)	17
	Reducción de la dependencia alimentaria/nutricional/energética	17
	Valoración y redistribución del trabajo doméstico y de cuidados	17
	Elecciones libres y libertad de expresión	17
V.	AGENDA NACIONAL PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL ECOLÓGICA	18
1	Eje sostenibilidad	20
2	Eje justicia social/igualdad/equidad	22
3	Eje democracia económica y social	23
VI.	ESTRATEGIA DE INCIDENCIA E IMPLEMENTACIÓN	25

I.

EL CONTEXTO DE CRISIS ECONÓMICA Y SOCIAL COVID-19

El año 2020 se inaugura con un inusual escenario económico y social. La crisis provocada por la pandemia de la covid-19, sin lugar a duda representa una clara expresión de las mayores amenazas globales de rápida evolución que han ocurrido en el último siglo: nuevas plagas, pestes, especies invasoras y pandemias. La velocidad con la que este nuevo virus (SARS-CoV-2) se ha expandido a nivel mundial y la severidad de las medidas que se han tomado en casi todos los países a nivel sanitario, económico y social han provocado serios impactos sociopolíticos y económicos. Estos han tenido efectos muy desiguales tanto en términos de regiones geográficas y condición socioeconómica como por género, grupo etario, entre otras.

En este contexto, posicionar una agenda nacional para la transformación social ecológica es una oportunidad para generar una salida que permita “transitar hacia un ‘sistema’ (sociedad) ecológicamente más sustentable, socialmente más justo e inclusivo, económicamente orientado ‘hacia la reproducción y plenitud de la vida’, políticamente más democrático, y humanamente más libre y solidario” (Mora, 2020, p. 9). Pero este es solo un escenario de los varios posibles que pueden imponerse a partir de la búsqueda de salidas a la crisis y sus impactos –y ni siquiera es el más probable.

La transformación social ecológica (TSE) de la economía y la sociedad es una propuesta que busca contribuir en la construcción de una sociedad orientada por la inclusión social y la sustentabilidad de la vida; nada más relevante en un contexto como el actual.

Avanzar en una agenda para la TSE implica la necesidad de articular a los diversos sectores comprometidos en un proceso de diálogo y construcción de respuestas inmediatas, así como de propuestas transformadoras desde una perspectiva productiva, social, ambiental y solidaria para enfrentar la crisis sanitaria y sus consecuencias económicas y sociales, especialmente sobre las personas más vulnerables. Este proceso pretende aportar en la superación de intereses sectoriales y proyectos particulares (sin negar a priori su validez). Además, permitir una articulación en torno a un frente común que trascienda la limitada gestión de temas y propuestas específicas, la cual facilite el desarrollo de una estrategia conjunta de incidencia que tome en cuenta los problemas y afectaciones de mayor interés de los diferentes sectores; pero procurando un horizonte de bien común.

Este estudio pretende ofrecer una propuesta de agenda nacional para la transformación social ecológica a partir de la traducción, actualización y concreción de la base conceptual ya disponible en propuestas políticas que puedan viabilizarse y permitan enfrentar las diversas amenazas y evitar la profundización de las desigualdades con enfoques de justicia e inclusión. Para esto, se ha realizado un análisis de las implicaciones sociopolíticas de las crisis causadas por la covid-19, identificando escenarios posibles, oportunidades desde los territorios, agendas compartidas y alianzas articuladas de incidencia.

II

IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS Y DE GÉNERO COVID-19

La noción de “actualidad” ha sido profundamente alterada en la coyuntura generada por la pandemia producto del virus SARS-COV-2. Hay una lógica de inmediatez que prima en la intervención de la crisis, por las propias características de este tipo de procesos. A su vez, la generación de información, análisis y opiniones sobre la situación vivida es la más amplia de la historia reciente. Sumado a esto, hay un aumento en la virtualización de los procesos de producción de conocimiento y su difusión, que posibilita el acceso a mayor cantidad de información y espacios de intercambio de los que se tenían previo a la crisis.

Por lo anterior, realizar un análisis de la situación actual presenta el riesgo de la pronta pérdida de vigencia. Sin embargo, establecer este punto de partida para pensar en la construcción de una agenda nacional para la transformación social y ecológica es fundamental para establecer la viabilidad de una propuesta que permita generar salidas a la crisis, a partir de las premisas de la justicia social y la sustentabilidad de la vida.

En este sentido, se comprende la crisis sanitaria originada por la pandemia covid-19 como una expresión de la crisis sistémica del capitalismo y de la modernidad en su etapa actual (modernidad in extremis). Por esta razón usamos la referencia a “crisis múltiples y multidimensionales”, que en el fondo se constituyen en expresiones de la crisis de un sistema político, económico y social que es ya incompatible con la preservación de la vida en el planeta y de los límites planetarios.

Esta crisis sistémica se traduce en amenazas diversas de las que ya el proyecto Transformación Social y Ecológica se ha ocupado previamente². Una de las cinco dimensiones de la insostenibilidad es precisamente la proliferación de especies invasoras, como es el caso del SARS-COV-2; situación que, según se ha demostrado en varias investigaciones recientes, tiene un nexo con la intensificación de la degradación de la naturaleza y de la destrucción del hábitat de especies silvestres³.

² Para profundizar en este elemento puede consultar: Biblioteca Transformación. Proyecto Regional Transformación Social Ecológica, Friedrich-Ebert-Stiftung.

³ Se reconoce ampliamente que el cambio de uso de la tierra, por ejemplo, la conversión de hábitats naturales en ecosistemas agrícolas o urbanos influye en el riesgo y la aparición de enfermedades zoonóticas en los seres humanos [...] Aquí analizamos 6.801 conjuntos ecológicos y 376

De esta manera, debe resaltarse el hecho de que existe un vínculo entre las formas en que se organiza el metabolismo social, las relaciones sociales de producción (que tienen su núcleo en la coordinación del trabajo social), la distribución y el consumo y el contexto que se desencadena por la actual pandemia de la covid-19.

Revela, además, este contexto la necesidad de abordar las discusiones sobre las relaciones sociales de producción. Esto con especial consideración en la categoría “proceso de trabajo” y las formas que adquiere en la actualidad –por ser temas que podrían parecer de índole sanitaria o medioambiental–, pues en un contexto de crisis como el actual, impactan de forma central en las posibilidades de reproducción de las condiciones de vida de la población, especialmente, de las personas más vulnerabilizadas social y económicamente.

La crisis debe ser abordada además con un énfasis en el análisis de las desigualdades preexistentes que son agudizadas en la actualidad. Parte de estas son las formas en que la crisis impacta de manera especialmente violenta a las mujeres, tanto en las posibilidades de reproducir sus condiciones materiales de vida y las de sus familias como en el recargo de dobles o triples jornadas entre el trabajo remunerado y no remunerado. Hoy más que nunca se requiere fortalecer políticas públicas y prácticas e innovaciones sociales que, además de visibilizar estas desigualdades, ayuden a transformarlas.

Es fundamental que la crisis actual sea abordada con una perspectiva que permita promover las transformaciones necesarias para atender la mayor cantidad de impactos generados en todas las áreas posibles. Asimismo, que permita manejar esos impactos de la crisis y abrir espacios para construir otros escenarios posibles. Lo anterior requiere que se visibilicen posibilidades en diferentes ámbitos, como políticos, económicos, sociales, ambientales, entre otros,

especies hospedadoras en todo el mundo, controlando el esfuerzo de investigación, y mostramos que el uso de la tierra tiene efectos globales y sistemáticos en las comunidades hospedadoras zoonóticas locales. En general, los hospedadores de vida silvestre conocidos de patógenos y parásitos compartidos por los humanos comprenden una mayor proporción de la riqueza de especies locales (18-72% más) y abundancia total (21-144% más) en sitios de uso humano sustancial (ecosistemas secundarios, agrícolas y urbanos) en comparación con los hábitats no perturbados cercanos (Gibb, Chin et al., 2020, p.1, traducción propia).

para colocar y avanzar en propuestas viables. Para esto, a continuación, se abordan elementos de la realidad tanto regional como nacional que aportan en la realización de este ejercicio.

En primer lugar, en el campo político existe gran confusión sobre las tendencias y los discursos. Los proyectos políticos de corte neoconservador han venido ganando terreno, constituyéndose en el imaginario social de muchos sectores populares como una posible oposición a los gobiernos de turno, especialmente a los “progresistas”. La insostenibilidad del sistema productivo y sus consecuencias en la vida cotidiana de amplios segmentos de población se ha venido achacando, casi de manera única, a las decisiones políticas de “gobiernos corruptos” y “alejados de Dios”. Esta postura ha tenido un impacto político mayor para los proyectos progresistas que se intentaron colocar en algunos países de América Latina en las dos últimas décadas con mayor o menor éxito.

En el caso costarricense, esta confusión en el campo político no es menor y es atizada por las propuestas de un gobierno vinculado a un partido político que se solía ubicar dentro del campo progresista. Este, ciertamente, impulsa transformaciones culturales que se identifican con una tendencia de este tipo; pero desarrolla una política económica que sigue generando concentración de la riqueza y beneficios para los pequeños grupos de poder y cargando los costos de la crisis en la clase trabajadora, con especial virulencia y miopía, en el sector público.

La importancia del proceso actual radica en que no se trata únicamente de la legitimidad o el apoyo al gobierno de turno, sino a la democracia como un todo, lo que en el mediano y largo plazo podría tener repercusiones para la defensa de un sistema político que ya venía siendo crecientemente cuestionado. Al respecto, según Alfaro y Vargas (2020) “desde hace ya dos décadas, los niveles de apoyo ciudadano a la democracia, la reserva de ‘buena voluntad’ con el sistema, son consistentemente menores a los que había treinta años atrás” (Alfaro y Vargas, 2020, párrafo 5).

Según el estudio realizado desde el Estado de la Nación y el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), para el mes de abril de 2020, la pandemia provocó un aumento del apoyo ciudadano al gobierno. Cuando la pandemia de la covid-19 impactó a Costa Rica, el nivel de apoyo ciudadano a la democracia era de 58 puntos en una escala de 0 a 100 puntos y los datos de abril revelaron que el respaldo a la democracia incrementó a 76 puntos, el valor más alto desde 1987. Como dicho estudio señala, esta tendencia no necesariamente es permanente, en especial porque en la historia mundial crisis como la que vivimos han provocado serias transformaciones a los sistemas políticos y económicos⁴.

⁴ Según la medición del CIEP para agosto de 2020, el respaldo ciudadano al sistema político desciende a 65 puntos, aunque aún se trata de “un valor superior al promedio de los últimos 16 años y por encima de los valores pre-pandemia” (CIEP, 2020, p. 65). Propiamente en el caso de la gestión del presidente Carlos Alvarado, en abril la encuesta arrojó una valoración positiva de un 65 % y negativa de un 26 %, valores

Mencionamos a manera de ejemplo “clásico”, el vínculo que algunas personas investigadoras han identificado entre la peste negra en Europa con la crisis de la sociedad feudal y el surgimiento del capitalismo.

La situación que se vive en este momento, donde las políticas asistenciales de emergencia promovidas por el poder ejecutivo no cuentan con contenido presupuestario para mantenerse por lo que resta de la crisis (por ejemplo el Bono Proteger) y la economía continúa contrayéndose, genera descontento en la población, el cual podría traducirse en una agudización del cuestionamiento al sistema político y abrir espacios para propuestas neoconservadoras y regresivas; pero, también, transformadoras y progresistas. La disputa está planteada.

Otro elemento del espectro político que conviene resaltar es la desmovilización y dificultad para la articulación de sectores que han llevado las luchas sociales históricas y de reciente data en nuestro país (sindicatos, movimiento ambientalista/ecologista, movimientos de mujeres, colectivos LGTBI, entre otros). En varios de estos grupos se ha gestado una pérdida de legitimidad, que es reconocida por las mismas personas que los conforman, debido, entre otras cosas, a la desconfianza en algunos de sus liderazgos. No obstante, el ensañamiento de la crisis contra las mujeres las ha puesto en un lugar protagónico de la acción social por una cuestión, literalmente, de vida o muerte.

Aporta a esta dispersión y desarticulación la confrontación de intereses entre sectores, a partir de la falsa dicotomía entre sector público-privado alimentada por el discurso conservador y la velada confrontación entre segmentos de la clase trabajadora y de la ciudadanía crítica, los cuales dificultan el diálogo y la articulación. En palabras de una de las personas de los colectivos que han participado de la construcción de la agenda, “parece que también la democracia está en cuarentena”.

En segundo lugar, como se mencionó previamente, la crisis sanitaria y las medidas para afrontarla tienen un gran peso en la situación económica a nivel mundial. Especialmente expresada en una fuerte retracción económica y en la afectación a los puestos de trabajo y la posibilidad de generar ingresos familiares, lo que ha colocado a muchas ciudades y países enteros al borde de crisis humanitarias.

Según la CEPAL (2020b), las proyecciones para el conjunto del año se han deteriorado con respecto a lo que se esperaba a comienzos de abril de este mismo año –proyecciones elaboradas solo cuatro meses atrás–. “La economía mundial experimentará su mayor caída desde la Segunda Guerra Mundial y el producto interno bruto (PIB) per cápita disminuirá en el 90 % de los países, en un proceso sincrónico sin precedentes” (CEPAL, 2020b, p.1).

que para agosto pasan a ser de 20 % y 50 % respectivamente. Esto muestra que, aunque el sistema democrático sigue siendo valorado mayoritariamente de manera positiva, la gestión del gobierno actual ha perdido legitimidad “pues la calificación de la ciudadanía al presidente Alvarado y a su gobierno retornó a los valores cercanos a los obtenidos durante el mes de marzo de 2019” (CIEP, 2020, p.23).

Si la palabra sistema económico global ha podido aplicarse en algún momento, este es el más indicado, donde se coloca el adjetivo de “crisis sincrónica” a una que tiene escala planetaria en tiempo real. Esta crisis afecta todas las formas de reproducción del capital: productivo, financiero y de la misma forma, al mundo del trabajo (asalariado y no asalariado, remunerado y no remunerado), así como al “sistema de vida”.

Según la misma fuente, la pandemia ha conducido al colapso del comercio mundial de mercancías. Se calcula que el volumen disminuirá entre un 13 % y un 32 % este año. Asimismo, el turismo, del que en Costa Rica dependen cerca de 75 000 puestos de trabajo directos, en los primeros cuatro meses del año “disminuyó un 44 % a nivel mundial. En el total del año, esta cifra podría llegar a entre un 60 % y un 80 %, la peor registrada desde el inicio de la serie, en 1950” (CEPAL, 2020b, p 3).

Respecto al mercado financiero conviene indicar que, además de las afectaciones que la pandemia ha generado, las características de su configuración ya venían anunciando una crisis en ese ámbito.

“La acumulación de deuda ha venido superando el crecimiento del ingreso mundial y ha alcanzado niveles históricos. En el cuarto trimestre de 2019, el acervo de deuda mundial superó los 255 billones de dólares, más del 322 % del PIB mundial” (CEPAL, 2020b, p. 6).

La retracción de la actividad económica afecta severamente al mundo del trabajo a nivel mundial. Respecto a la situación del empleo, según la OIT en su reporte del 20 de junio, la afectación ha sido mayor que las proyecciones que se realizaron al inicio del 2020 y se prevé que la situación se agrave.

“En el primer trimestre del año se perdió aproximadamente un 5,4 por ciento de las horas de trabajo en todo el mundo (equiparable a 155 millones de empleos a tiempo completo), con respecto al cuarto trimestre de 2019. Se prevé que en el segundo trimestre de 2020 se pierda en todo el mundo el 14,0 por ciento de las horas de trabajo (equiparable a 400 millones de empleos a tiempo completo), y que las mayores pérdidas se registren en las Américas, a razón del 18,3 por ciento.” (OIT, 2020, p.1)

Nuestro continente es el lugar donde se estima que las condiciones laborales serán más afectadas. Particularmente, en América Central el cálculo aumenta a un 19.2 por ciento de pérdida de las horas de trabajo. Este hecho se relaciona con las características específicas de estos países, las categorías laborales a las que pertenecen grandes segmentos que no son teletrabajables y por la dependencia de condiciones internacionales en decadencia en muchos de los empleos.

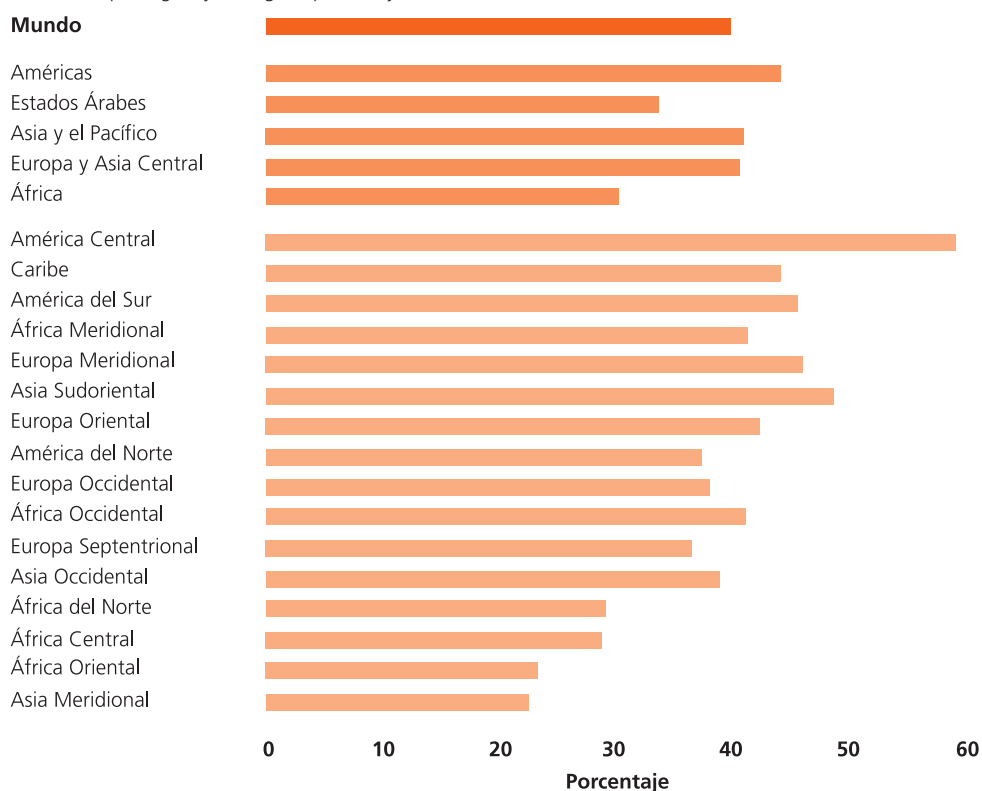
En Costa Rica, la Encuesta Continua de Empleo del trimestre móvil Abril-Mayo-Junio 2020 indica que en el país hay 551 373 personas desocupadas, lo que representa un aumento de 256 000 personas con respecto al mismo periodo del año pasado. La tasa de desempleo nacional se estimó en 24 %, en comparación con el mismo trimestre del año anterior, aumentó estadísticamente en 12.1 puntos porcentuales. A su vez, el porcentaje de subempleo subió a 20.5 % de la población ocupada (INEC, 2020).

Conviene resaltar que esta situación tiene un grave componente de género, que podría intensificar la situación de desigualdad en que históricamente han estado las mujeres. Particularmente, por ser el mundo del trabajo un espacio donde estas desigualdades se materializan de múltiples maneras.

Como históricamente ha sucedido, las mujeres presentan una mayor tasa de desempleo que los hombres (30.4 % y 15.4 % respectivamente). A su vez, son las mujeres las que presentan la mayor tasa de no participación (55.4 %) en contraste con los hombres (29.5 %) (INEC, 2020).

Dentro de los elementos que provocan ese impacto desigual está el tipo de sectores por actividad económica más golpeados por la crisis, donde gran parte de los puestos son ocupados por mujeres. Se trata de oficios domésticos, alojamiento y servicio de comidas; comercio al por mayor y al por menor; actividades inmobiliarias, actividades administrativas y comerciales, y las industrias manufactureras. En este sentido, la situación preocupa a nivel internacional; pero es aún más severa en el caso de América Central donde la OIT calcula que el 58.9 % de las mujeres trabaja en estos sectores.

Gráfico 1.
Mujeres que trabajan en sectores golpeados por la crisis de la COVID-19
 A nivel mundial, por región y subregión (porcentaje)



Fuente: OIT (2020).

Además del riesgo de la reducción de puestos de trabajo, la informalidad presente en muchas de las relaciones laborales de las mujeres implica la desprotección en términos de acceso a seguridad social y otros derechos laborales que podrían aportar a generar un respaldo ante la situación.

Otro elemento que resaltar cuando se aborda la transformación social y ecológica desde una perspectiva de equidad de género es la recarga del trabajo doméstico y los cuidados no remunerados en las mujeres, que se ha agudizado en el contexto actual⁵. El cierre de centros educativos para la primera infancia y escuelas, así como la interrupción de la prestación de servicios de atención social y la falta de disponibilidad de familiares adultos mayores (en su mayoría mujeres) para prestar ayuda, ha aumentado la demanda de servicios de atención social durante la crisis.

Por último, el sector de servicios de salud está constituido en gran parte por mujeres, sobrerrepresentadas en los trabajos de “primera línea” especialmente en los sectores sanitario y de asistencia social. En América Latina, según datos de la CEPAL, las mujeres representan el 72.8 % de las personas ocupadas en el sector salud (CEPAL, 2020a, p. 23). En el caso costarricense por cada enfermero hay 3.5 mujeres que ejercen la profesión en la Caja Costarricense del Seguro Social.

⁵ En períodos de normalidad, las mujeres llevan a cabo alrededor de tres cuartas partes del trabajo de prestación de cuidados no remunerados. El tiempo que dedican las mujeres a dicho trabajo aumenta si hay niños en el hogar (OIT, 2020, p. 12).

Todos estos elementos requieren que las soluciones en temas de empleo tengan un componente que catalice la reducción de estas brechas, con lo cual se coloque la economía de los cuidados y su corresponsabilidad a partir de acciones de política pública acompañadas de transformaciones sociales y culturales.

Un elemento que conviene rescatar en este punto es que las mujeres realizan el cuidado de otras personas; pero, también, tienen un papel central en el cuidado de la naturaleza. Por tanto, su rol en la promoción de prácticas agroecológicas y en la conformación de opciones productivas de base asociativa debe ser fortalecido mediante políticas que le permitan esas iniciativas contar con apoyo técnico y financiero para constituirse como una alternativa para afrontar la situación actual.

En este sentido, existen en la actualidad prácticas de economía social solidaria que representan formas alternativas de relaciones de producción y distribución. Según la Cámara Nacional de la Economía Social Solidaria (2020), existen registradas más de dos mil empresas y organizaciones, como cooperativas, asociaciones, fundaciones, etc., que están presentes en todos los sectores de la economía y pueden constituirse en una alternativa para fortalecer las oportunidades de las mujeres para una sociedad menos desigual⁶.

⁶ Según CANAESS estas empresas registran aportes económicos de más de €132 000 millones en exportaciones, más de 3 357 850 personas beneficiadas con el transporte público, 708 000 personas beneficiadas con servicios de electrificación, el 36.7 % de la producción nacional de café y la generación de 21 632 empleos directos, entre otros beneficios como ahorro y crédito, al igual que servicios agrícolas. (Cordero, 2019)

Resaltamos además el papel de las mujeres en el cuidado de la comunidad. A pesar de que en muchos casos no ocupan los lugares de liderazgo en organizaciones de base, por las mismas herencias patriarcales, son las mujeres quienes más participan en espacios como Juntas de Salud, de Educación, organizaciones ambientalistas o en procesos organizativos autónomos que buscan promover el bienestar de las comunidades y territorios desde criterios de solidaridad.

El abordaje del contexto actual requiere que se plasmen elementos que permitan evidenciar las discriminaciones, desigualdades e inequidades sociales que prevalecen en diversos ámbitos. Desigualdades de género, pero también de clase y en los territorios, que median tanto en la producción de los daños socioambientales como en las afectaciones de estos a la población. Según datos de OXFAM (2015), el 10 % de personas más ricas de la población mundial emite la mitad de los gases de efecto invernadero, mientras la mitad más pobre de la población emite solo el 10 % de estos mismos gases⁷.

Sin embargo, son estas personas de los sectores más excluidos quienes sufren las mayores implicaciones de las consecuencias de los daños socioambientales, como en el caso de la pandemia por la covid-19. En Costa Rica, la segunda ola de contagios tiene un componente socioeconómico importante, pues afectó a personas que pertenecen a labores de la agroindustria y el sector de construcción. Asimismo, en el caso de la Gran Área Metropolitana, a comunidades con mayor incidencia de pobreza y exclusión social⁸.

Sobre las condiciones de estos hogares, en el artículo “Las desigualdades que enfrentan los hogares en cuarentena” Jiménez, Morales y Segura retoman datos del INEC para indicar que:

“De los poco más de 1.600.000 hogares de Costa Rica, un 9% reside en viviendas en mal estado y un 2% posee hacinamiento (más de 3 personas por dormitorio). Los espacios reducidos también dificultan la situación. Aproximadamente un 15% de las casas mide menos de 40 metros cuadrados (m²), en contraste, un 27% supera los 100 m² (INEC, 2019). Además, se estima que 104.000 viviendas (7%) no tienen acceso a servicios básicos como agua, luz y manejo de residuos sólidos” (Jiménez, Morales y Segura, 2020, párrafo 2).

Estas desigualdades impactan en el acceso a conectividad y, por lo tanto, a la educación, que de momento se mantiene mediante la virtualización de los procesos. Asimismo, en el acceso a información confiable y descentralizada, entre otros elementos que agudizan esas desigualdades preexistentes.

⁷ Según la misma fuente, la huella de carbono media de una persona que se encuentre entre el 1 % más rico de la población mundial puede ser hasta 175 veces superior a la de alguien que se encuentre entre el 10 % más pobre.

⁸ Distrito de Pavas, cantón de Alajuelita y Desamparados. En el caso del cantón Central de San José, la situación reportada de los contagios fue en población que habita en “cuarterías”.

Existen problemas muy serios de pobreza, miseria, exclusión, degradación de la naturaleza y concentración del poder político, como lo ha desnudado en forma brutal la pandemia. Además, los sistemas de protección y seguridad social

requieren de fortalecimiento para dar respuesta ante situaciones como la vivida, donde ha quedado al descubierto que existe gran fragilidad y deben tomarse acciones urgentes para garantizar la sostenibilidad y el acceso a estos sistemas.

En resumen, la coyuntura actual requiere de políticas extraordinarias en temas fiscales, económicos y sociales si se pretende revertir la tendencia que la crisis genera, el aumento de la conflictividad social y las profundas desigualdades de las que América Latina es la mayor exponente a nivel mundial.

La construcción de alternativas para confrontar estas tendencias y, en su lugar, lograr una realidad más equitativa es la tarea urgente, mediante la articulación de diversos proyectos en torno a una agenda común. Los procesos de crisis también podrían ser momentos de oportunidad.

“Incluso en escenarios formales, ideas antes inconcebibles o consideradas inviables, ocupan un lugar central en la agenda a nivel mundial. Aun agencias económicas como la CEPAL proponen una renta básica universal⁹, y el Fondo Monetario Internacional recomienda a los gobiernos introducir un impuesto a la riqueza, para contrarrestar la escandalosa desigualdad y reducir los déficits fiscales¹⁰. En el norte global, movimientos sociales y políticos pugnan por un nuevo pacto eco social global para salvar el planeta, que articule justicia social y justicia ambiental” (Pacto Ecosocial, 2020, párrafo 6).

Este escenario requiere de creatividad, innovación y memoria histórica para posibilitar la construcción de un diverso bloque común que pueda consolidar un proceso de transformación social y ecológica que represente los intereses de las mayorías; pero, además, que pueda ser visualizado por estas como una alternativa real a la resolución de sus necesidades más inmediatas.

⁹ Ante la situación, la CEPAL en un documento publicado al 15 de julio 2020 propone como medidas que se considera pertinente resaltar:

- Un ingreso básico de emergencia como instrumento de protección social por 9 o 12 meses debido a la persistencia de la crisis.
- Un bono contra el hambre: esta medida puede ejecutarse a través de transferencias monetarias, canastas de alimentos, cupones de alimentos o programas de alimentación escolar.
- La flexibilización y mejora de las condiciones de crédito a empresas.
- Un bono para inversión de 250 dólares en las explotaciones agrícolas más rezagadas, entregado una sola vez, para adquirir fertilizantes, semillas y otros insumos. Esta medida abarcaría al 40 % de la agricultura familiar
- Evitar la destrucción de capacidades mediante el cofinanciamiento de la nómina salarial diferenciado según el tamaño (un 30 % para las grandes empresas, un 50 % para las medianas empresas, un 60 % para las pequeñas empresas y un 80 % para las microempresas por 6 meses) y una contribución en efectivo a los trabajadores autónomos formales por el mismo periodo (CEPAL, 2020b).

¹⁰ La política fiscal deberá contribuir al logro de estos objetivos a través de un sistema de tributación progresiva y eficiente en que se fortalezca el impuesto sobre la renta y el patrimonio y se aprovechen los espacios para la tributación de la economía digital, las actividades que dañen el medio ambiente y el consumo de productos negativos para la salud. Además, se debe promover un gasto público efectivo y equitativo en que se priorice la atención de las necesidades sociales. (CEPAL 2020b).

Sin embargo, ante el escenario y las respuestas políticas que se están dando a la crisis, pareciera que el escenario futuro podría tener otras características.

III

EL MUNDO QUE SE VISLUMBRA POSCOVID-19

Este breve apartado no es un ensayo de futurología. Y no lo es, porque solo busca proyectar algunas de las tendencias que ya están en curso en ciertas áreas de la economía, el trabajo, las nuevas tecnologías, la salud pública, entre otras, por lo cual es previsible que se acentúen en los próximos años; pero con más fuerza y rapidez de lo previsto.

Partimos de una constatación histórica. Las grandes revoluciones (neolítica, industrial), la caída de grandes imperios (Romano, Azteca, etc.), las grandes guerras (I y II Guerra Mundial) y las grandes pandemias (viruela, peste bubónica, gripe española, etc.) suelen provocar, precipitar o acelerar grandes cambios sociales, tecnológicos, económicos y políticos.

También partimos de una hipótesis razonable. En la próxima década, el temor a la aparición de nuevos y letales virus que puedan afectar a la población humana, junto con las preocupaciones por el calentamiento global y sus graves consecuencias en los ecosistemas y en la salud humana obligarán a aquellos países que no quieran verse arrastrados a crisis humanitarias de enormes proporciones a realizar ingentes inversiones en materia de salud, ciencia, tecnología, educación y formación de altísimo nivel. Este panorama puede ser congruente o no con una apuesta por la radical disminución de las desigualdades que, sin embargo, vemos acentuarse durante la pandemia. Algunas sociedades optarán por servicios de salud universales y más igualitarios; pero otras podrían decidirse por servicios avanzados de salud aún más mercantilizados y, consecuentemente, solo para las minorías dominantes.

En materia de empleo, el teletrabajo y las comunicaciones a distancia avanzarán a paso acelerado, tal como ya está ocurriendo en medio de la presente crisis. Esta menor movilidad tendrá efectos importantes en la industria de la construcción de oficinas, en el transporte público y privado, en la distribución a domicilio de bienes y servicios, entre otras actividades. Estos cambios pueden parecer positivos, pero una gran amenaza aparece junto con ellos: una mayor precarización del trabajo de los nuevos asalariados, el “proletariado digital”. Tal como ya lo estamos viendo en empresas como Amazon y Uber, en la que sus trabajadores se organizan frente a las extenuantes jornadas de trabajo o sus deplorables condiciones laborales. Esta precarización del

“proletariado digital” y de los trabajos de distribución (“colaborativos”) será una seria amenaza contra el estatus de las clases medias, tal como las conocimos en el siglo XX. A esto se sumaría a la creciente sustitución de los trabajos susceptibles de ser automatizados y a la crisis de los cuidados. Es el debate sobre el “futuro del trabajo” que ya nos ha alcanzado.

El distanciamiento físico y social que, en mayor o menor medida se mantendrá activado por largo tiempo (según aparezcan nuevos rebrotes, oleadas o cepas del SARS-CoV-2 u otros virus), incidirá en menores desplazamientos y posiblemente también en un menor dinamismo demográfico, objetivo de quienes postulan que es urgente reducir el tamaño de la población mundial. También aumentarán a un ritmo exponencial las compras on line y la educación virtual, lo que afectará las formas de interacción social y la organización de las ciudades. Podemos tener ciudades más planificadas y hasta más “inteligentes”, pero seguramente también más controladas e inseguras.

Un cambio que afectará severamente a varios países latinoamericanos es la caída del turismo internacional y, en general, de los viajes internacionales. El impasse tecnológico en videoconferencias e infocomunicaciones desde la aparición de Skype se ha visto rebasado repentinamente y abruptamente con la aparición de diversas plataformas tecnológicas de comunicación a distancia, lo que hace prever una drástica reducción en los viajes internacionales, al tiempo que el turismo masivo difícilmente se podrá recuperar a los niveles de antes de la crisis. Esto, sin embargo, crea nuevas oportunidades para el turismo local, los circuitos locales, los intercambios solidarios y la diversificación de la matriz productiva con más rapidez e intensidad de lo previsto y más allá de los inseguros cambios en la demanda de combustibles fósiles y de otros recursos naturales a nivel mundial.

Esta crisis ha puesto al descubierto la mayor o menor incapacidad de los gobiernos de responder a amenazas que la población considera de muy grave impacto en sus vidas, por lo que es previsible un mayor grado de conciencia crítica y movilización en contra de los gobiernos incapaces de gestionar el Estado, la economía y la salud pública. Sin embargo, los países asiáticos, con China a la cabeza, muestran la posible vuelta hacia un mundo más controlado y

un nuevo ascenso de tecnocracias y autocracias ilustradas, que ahora contarán con tecnologías de acceso universal posibilitadoras del rastreo a gran escala de compras, pagos de impuestos (y su evasión), movimientos geográficos, opiniones y simpatías políticas de los ciudadanos, etc. Así, las demandas democráticas estarán más que nunca en el orden del día.

La globalización neoliberal posiblemente se fragmente en grandes áreas económicas, como la norteamericana, la asiática y la europea. En el caso de los Estados Unidos, este país –imperio en decadencia–, volverá a tratar al resto de América como su patio trasero y pretenderá recuperar las influencias perdidas frente al avance de China y Rusia en Latinoamérica. La integración política y económica de la región, tan maltrecha en la última década, pasará a ser una urgencia vital si queremos impedir el regreso de las “Repúblicas bananeras” por toda la región.

La fe en el “libre mercado” se ha resquebrajado considerablemente, por lo que veremos un nuevo ascenso de la planificación estatal. Especialmente, en campos como la salud, la educación, la agricultura y las energías, en concordancia con la lucha contra el cambio climático. Este mayor estatismo, como señalamos antes, puede conducir hacia un mayor control social y regímenes más autocráticos, por lo que se hará necesario el impulso de innovaciones sociales y de prácticas democráticas que contrarresten esta tendencia. Un Estado “más fuerte” frente al mercado desenfrenado no es algo bueno de por sí, ya que bien puede tratarse de un Estado más democrático o más autoritario.

Pareciera también que el fin del dinero cash se aproxima. Rusia y China lo ven como parte de su estrategia para quebrar la hegemonía del dólar, que le da a Estados Unidos poderes inauditos y posibilidades de intimidación y chantaje sobre el resto del mundo, especialmente desde la instalación del petrodólar. Pero es también una tendencia del capitalismo: reducir los costos de circulación asociados a la existencia de monedas mercancía, primero, y dinero fiduciario después. El poder de los grandes bancos comerciales y de inversión buscará redefinirse siguiendo la tendencia de las criptomonedas, así como la “independencia” de los bancos centrales y su excesivo énfasis en la estabilidad monetaria ya está siendo cuestionado.

No parece que estemos a las puertas del fin del capitalismo, pues este buscará adaptarse a los cambios políticos, sociales y tecnológicos, aumentando sus poderes de control sobre los nuevos medios de producción y las nuevas formas de coordinación, integración y dominación social.

Sin embargo, opciones postcapitalistas también podrán y deberán surgir, dado el nuevo rol del Estado, la irrupción ciudadana, la fragmentación de la economía global, el posible mayor control sobre las grandes empresas transnacionales (aunque sea solo en materia tributaria), ya que las nuevas funciones estatales requerirán de mayores impuestos para financiarse. Lo que sí podría llegar a su fin, al menos en términos históricos, es el capitalismo neoliberal y financiarizado que ha llevado a muchos países a un sobreendeudamiento extremo insostenible.

Por último, la lucha hegemónica mundial traerá posiblemente el fin del “siglo americano”, del dominio de los Estados Unidos como gendarme mundial y el consecuente ascenso de China y Rusia, que ya es evidente. Las grandes crisis mundiales suelen actuar como movimientos tectónicos en la geoconomía y la geopolítica mundiales.

En definitiva, el mundo que esperábamos para la segunda mitad de este siglo se adelantará un par de décadas. Será un mundo muy diferente, aunque no podemos prever si será un mundo mejor o peor. Eso dependerá de cómo se desarrollen las distintas narrativas de “salida y recuperación de la crisis”, de las tensiones y contradicciones asociadas, de las innovaciones tecnológicas y sociales que surjan a nivel local, nacional, regional y mundial. En fin, del resultado de la batalla de ideas y poderes, donde la transformación social-ecológica tiene una gran oportunidad para posicionarse y orientar los cambios necesarios por “otro mundo posible (y mejor)”.

IV

ESCENARIOS SOCIOPOLÍTICOS Y ECONÓMICOS POSCOVID-19

Los previsibles escenarios que abre la situación actual son variados y cargados de incertidumbre. Sin embargo, debido a las formas en que se configuran en la actualidad las fuerzas políticas, sociales y económicas en torno a la pandemia, se postula la posibilidad de que se perfilen tres posibles alternativas en Costa Rica. La posibilidad de materializarse de cualquiera de estas alternativas como proyecto hegemónico dependerá de la articulación, la capacidad de comunicación e incidencia y de la idoneidad de los proyectos de las distintas fuerzas sociales y políticas.

En la actualidad el abordaje que las autoridades del gobierno costarricense realiza, si bien ha implicado una serie de medidas de contención de los impactos de la crisis hacia las familias que habitan el territorio nacional, principalmente a través de políticas sociales de tipo asistencial (bono proteger, asistencia alimenticia desde centros educativos, entre otras), en términos macroeconómicos han mostrado una clara influencia de los sectores empresariales dominantes, que han aprovechado el contexto para profundizar medidas que van en la línea de su proyecto económico (neo)conservador.

Estas propuestas enfatizan la tendencia a recargar las consecuencias de la crisis en los sectores más vulnerables de la población y en el sector público (funcionarios e instituciones), mientras persisten prácticas que vienen retrayendo derechos laborales y el financiamiento de la inversión social, utilizando como pretexto la pandemia.

Si bien la gestión de la crisis puede ser un momento de oportunidad para avanzar sobre proyectos que vengán a contrarrestar la tendencia que viene profundizando desigualdades y la acumulación concentrada de riqueza, este es solamente un escenario posible que requiere de una estrategia de articulación de los sectores y movimientos sociales que propugnan por una sociedad más justa y equitativa. A continuación, se exponen los escenarios visualizados y sus principales características.

A. AGENDA CONSERVADORA REGRESIVA

Aunque se postula como un escenario futuro, en la realidad es el escenario que ya se viene imponiendo a partir de las decisiones que el actual gobierno costarricense está tomando para gestionar la crisis y el papel activo de los actores que lo impulsan.

Las evidencias se muestran en diversas áreas, tanto en materia ambiental y laboral como en la política fiscal y en la forma en que se ejerce el poder. Debido a los discursos que las cámaras y organizaciones empresariales vienen posicionando, donde pareciera que el gobierno en gran medida se acomoda a sus demandas, existe mucha confusión en la opinión pública sobre la posición y el actuar propio del poder político y los grandes medios de comunicación, tal como se refleja en la llamada “estrategia del baile y el martillo”. Sin embargo, existen claras evidencias del rumbo tomado, que se pasa a detallar.

Lo laboral

En materia laboral y desde que inició la crisis, el precepto no ha sido proteger el empleo, lo que habría sido posible subsidiando parcialmente los salarios o las contribuciones a la seguridad social en los casos que fuera necesario, impidiendo los despidos y las disminuciones de jornadas hasta donde fuese posible. En su lugar, se ha privilegiado la consecución y distribución de recursos mediante transferencias no condicionadas (bono proteger) en cuantías absolutamente insuficientes para evitar un aumento considerable de la pobreza. Este escenario está permitiendo la flexibilización de la legislación laboral, abriendo la posibilidad de la finalización de relaciones laborales sin responsabilidades para empresas y patronos y abonando el terreno para una mayor precarización laboral.

A su vez, se autorizó el recorte de jornadas y en la actualidad se plantea esta misma práctica para las personas que laboran en el sector público, lo que tendría repercusiones no solamente en los ingresos personales o familiares, sino que además afectará la recaudación de aportes a la seguridad social, la tributación y el impulso de la demanda agregada. En nuestro país los avances históricos por la protección de derechos laborales se encuentran consagrados en la Constitución Política y las medidas anticrisis, como justificación para avanzar en esta agenda de regresión de derechos laborales que incluye avanzar en reformas al empleo público, han sido la punta de lanza de una estrategia claramente anti laboral.

Adicionalmente, se está impulsado con fuerza como una supuesta alternativa a la desigualdad laboral en el sector público, la promoción de la ley de empleo único, impulsada

no solamente desde el mismo gobierno sino también desde los planteamientos de organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial. Existe a su vez una tendencia a la promoción de trabajos sin un vínculo laboral formal, lo que agrava los niveles de informalidad que ya venían creciendo. Este sector informal que ha sido el más golpeado en la crisis es el que menores medidas de apoyo ha recibido en la gestión de las consecuencias de la pandemia.

Lo ambiental

En materia ambiental, especialmente los sectores empresariales aprovechan la pandemia para hacer propuestas que impulsan actividades extractivistas, como reactivar la minería en el país, reviviendo proyectos que estaban detenidos, así como promover la flexibilización de las regulaciones ambientales actuales¹¹.

Una de las áreas en que se visualiza el impulso de esta estrategia es la de los agronegocios, donde ya existen desde hace años prácticas que se constituyen en verdaderas amputaciones ambientales, llevando el monocultivo incluso a los mismos linderos de zonas protegidas. Solamente en el caso del monocultivo de la piña, para 2019, había invadido 16 324 hectáreas de humedales protegidos (PEN, 2019). Estos procesos se desarrollan a la vez que se recorta presupuesto a instituciones que velan por que el ambiente sea respetado.

Otro ejemplo de estas acciones radica en que se promueve mantener la matriz energética basada en combustibles fósiles; pero, además, se propone como salida a la crisis la extracción de dichos materiales en Costa Rica, lo que incluso tiene cuestionamientos como salida de la crisis cuando los precios de estas materias a nivel internacional se encuentran deprimidos y cuando muchos convenios internacionales buscan una política de protección del ambiente (por ejemplo el Acuerdo de París y la Agenda 2030: Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Lo institucional

En materia institucional la propuesta regresiva se expresa en un debilitamiento de instituciones que representan al Estado Social costarricense, en especial, del sector agropecuario. Contrario a lo que se pensaría que debe generar una crisis sociosanitaria como la actual, en nuestro país se ha visualizado la oportunidad de mercantilizar la salud, provocando el debilitamiento de la Caja Costarricense de Seguro Social y del sistema de protección social. Las medidas tomadas han implicado, por un lado, la reducción sin compensación equivalente de las contribuciones a la seguridad social (base mínima contributiva), al tiempo que el pago de la deuda histórica del Estado con la institución se ha condicionado a la aprobación de empréstitos de organismos internacionales y la reducción de jornadas en sector público afectaría aún más

la reducción en las cotizaciones.

Estos elementos afectan también el financiamiento del seguro de salud, los sistemas de jubilación –que ya venían evidenciando dificultades para su sostenibilidad– y, consecuentemente, las posibilidades reales para la población joven de llegar a tener una jubilación digna mediante el sistema de la CCSS. Por su parte, este debilitamiento en el fondo refleja un interés privatizador, que se orquesta desde hace años, en instituciones como el Instituto Costarricense de Electricidad, el cual, en el contexto actual de virtualización, tiene un papel aún más importante en términos de justicia social y acceso al conocimiento digitalizado.

Otra de las estrategias que se aceleran producto de la crisis y que debilitan la institucionalidad pública es la venta de activos que ya se están negociando en este momento, como la Fábrica Nacional de Licores. En este tipo de propuestas se invisibiliza el papel que tiene esta empresa estatal en la generación de encadenamientos con el Consejo Nacional de la Producción, quien tiene un importante papel en el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) y la gestión de las compras públicas a pequeños y medianos productores.

Esta visión de privatización o concesión de activos y potestades del Estado no es nueva, se promociona desde la visión neoliberal desde finales de la década de los 80 en Costa Rica. Sin embargo, en el contexto de esta crisis se ha aprovechado para fortalecer la idea de que la empresa privada puede asumir actividades propias del Estado, a partir de los intereses empresariales de intervenir en temas como la salud pública o la generación y distribución de energía.

La convivencia democrática

En lo que respecta a la convivencia democrática, se agudiza el vaciamiento de la democracia que viene dándose desde hace muchos años, donde además de los poderes oficiales, la dimensión simbólica se encuentra cooptada por medios de comunicación que son en realidad empresas de grandes capitales que funcionan para sus intereses. Esto con el agravante de que en la actualidad han extrapolado sus poderes hasta medios de carácter local. Aunado a lo anterior, las redes sociales, como grandes corporaciones, son utilizadas para la generación de datos y vendidos a estos mismos intereses.

Otro claro ejemplo de este “vaciamiento de la democracia” es la negativa del gobierno a realizar un verdadero diálogo con los sectores sociales y los actores territoriales que representan los intereses de las mayorías. Lo anterior, producto en gran medida de una política de las cúpulas que hacen lobby en espacios informales y a partir de relaciones personales y familiares entre estos grupos. La crisis pone en evidencia cómo se ha detenido el impulso hacia una democracia real, lo que no es una situación exclusiva para Costa Rica, sino que es un fenómeno regional y global. El “disciplinamiento social” y la fragmentación de las relaciones sociales directas se utilizan como palanca para impulsar proyectos conservadores y autocráticos.

¹¹ Al respecto: <https://feconcr.com/noticias/el-pais-retrocederia-treintanos-en-material-ambiental-con-reforma-al-reglamento-de-setena/>

Los derechos humanos

Por su parte, en materia de derechos humanos, se observa el avance de una transición conservadora que posiciona fundamentalismos que banalizan las distintas discriminaciones, desigualdades y exclusiones estructurales, empoderando ideologías que manipulan pensamientos científicos, fundamentándose en realidad en la reproducción de estereotipos y formas de reproducción de esas desigualdades. Estas posiciones se evidencian, por ejemplo, en propuestas como las que aducen que existe una “ideología del género” que socava las estructuras tradicionales sustentadas en criterios biológicos supuestamente “científicos”. Todo esto ocurre al tiempo que la violencia contra las mujeres y los feminicidios aumentan de manera altamente preocupante.

La hegemonía cultural

Este es uno de los temas que muestra cómo la disputa de la hegemonía cultural está en juego, pues avances que vienen gestándose para contrarrestar las violencias más disímiles y que hicieron posible el pacto por la defensa de los derechos desde una perspectiva universal se cuestionen hoy ampliamente. La retracción de derechos es hoy una amenaza que debe resistirse para seguir avanzando no solamente en declaraciones y legislación difícil de aplicar, sino en las prácticas sociales por una sociedad más equitativa y justa, que respete y valore positivamente la diversidad humana.

Sin duda, los riesgos que esta transición conservadora regresiva representan en el corto plazo para los sectores más afectados por la crisis son muchos. Puede traducirse en una crisis humanitaria provocada por la falta de acceso al derecho al trabajo, la alimentación, la vivienda y la misma salud. En el largo plazo, avanzar por esta ruta representa una amenaza para la humanidad como un todo, potenciando los riesgos de una inminente crisis climática, política y social.

B. AGENDA CONSERVADORA REGRESIVA CON REFORMAS

Este escenario tiene los mismos elementos regresivos de la anterior, sin embargo, se ve matizado con una perspectiva reformista, en diversas áreas. Una propuesta fundamental es la referencia a la alternativa que representa el “capital natural” del país para hacer frente a la crisis, mediante la promoción de una “economía verde” o una “economía circular” en su versión más restrictiva y mercantilizada¹².

En la línea planteada por CEPAL, por ejemplo, a través del mercado de los “bonos de carbono”, como una forma de atender la deuda externa. Este elemento además se coloca en la posibilidad de aprovechar el turismo costarricense y la naturaleza como un elemento de reactivación económica, debilitando regulaciones ambientales.

¹² Una “economía circular fuerte” tiene mucho más sentido como alternativa a la crisis de los residuos y el colapso de los sumideros naturales, pero sería preferible llamarla “economía reproductiva”.

La mercantilización de la naturaleza se postula como una posibilidad para afrontar la crisis, pero siempre pensando en una visión antropocéntrica, donde se coloca el resto de los ecosistemas en función del ser humano y la sociedad, pero más aún, del mercado y el crecimiento económico.

En material fiscal implica proponer reformas fiscales más o menos progresivas, que pueden grabar los grandes salarios de los sectores público y privado, pero no necesariamente las grandes fortunas, ni se promueve contundentemente la lucha contra la elusión y evasión fiscal, que hoy demanda acciones internacionalmente articuladas.

En el campo social, las acciones de este tipo buscan hacer viables las transferencias de políticas asistenciales, a la vez que se busca generar empleo a través de la promoción de obra pública e inversiones “verdes”. A pesar de que no se establece una política de atención de la crisis como un todo, se desarrollan acciones tendientes a reducir los impactos en la población más afectada por la crisis.

C. TRANSFORMACIÓN SOCIAL ECOLÓGICA DE LA ECONOMÍA

La creatividad para provocar una salida de la crisis con equidad social y sustentabilidad requiere de claridad política. Una que permita articular los diversos intereses sectoriales y mostrar cuáles son las políticas y prácticas sociales que deben ser modificadas en el corto, mediano y largo plazo para generar transformaciones que impacten en temas productivos, ambientales y sociales. Todo esto con una imprescindible perspectiva de género que permita disminuir las injusticias e inequidades.

En este sentido es que la transformación social y ecológica aporta no solamente desde una perspectiva teórica sino desde la generación de rutas y alternativas concretas. Con esta finalidad, se define que el objetivo general de la propuesta de transformación social y ecológica es “colocar las necesidades de la especie humana (y del resto de seres vivos) y su bienestar (bien-vivir) en el centro de la discusión y el diseño de los sistemas económicos, de las políticas públicas, de las reformas institucionales y de la promoción de los valores necesarios para su realización” (Mora, 2020, p. 22). En este sentido, la propuesta de TSE busca reconfigurar la economía con criterios sociales y ecológicos. A nivel de la región,

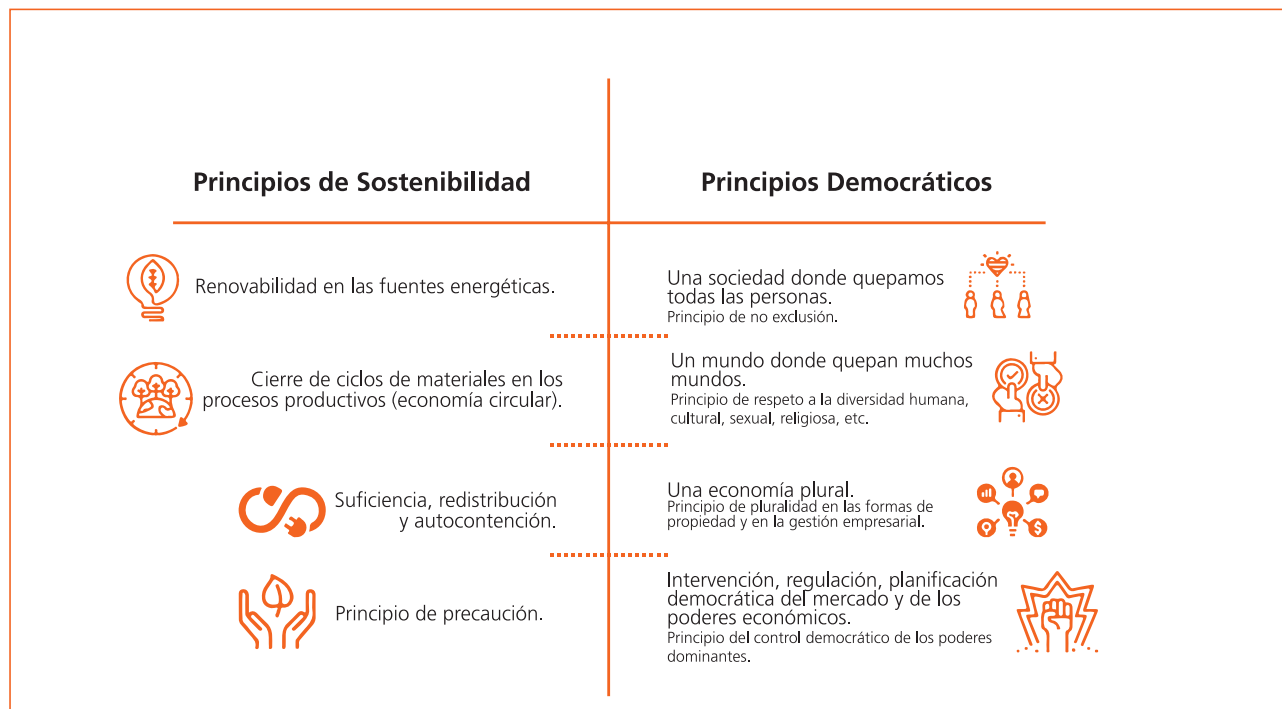
“La economía circular y plural regional que se propone es un intento de respuesta a la ceguera social y ecológica del mercado en el mundo y particularmente del extractivismo en América Latina. Se pretende la transformación productiva con sostenibilidad social y ecológica: mantenga las funciones de los ecosistemas, evitando que se desaten virus como el actual; propicie circuitos de producción-consumo-reciclaje que sustentados en la innovación, entre otras cosas, disminuyan los niveles de residuos y emisiones que aumentan la vulnerabilidad de la salud humana; genere empleos dignos en el marco de sistemas de seguridad social de cobertura

universal; valore las actividades cotidianas de protección y cuidados en manos especialmente de mujeres” (De Lisio, 2020, párrafo 10).

La TSE requiere, por un lado, que se realicen reformas estructurales y transformaciones culturales. Esto implica que las nociones de bienestar y desarrollo se sustenten en otro referente teórico y ético, representado por las formas en que

muchas organizaciones de base, movimientos sociales y prácticas autónomas se guían.

El enfoque ético-político de la transformación social y ecológica es guiado por los principios de sostenibilidad y democracia que debe primar en las prácticas sociales y las decisiones políticas.



Para lograr avanzar con estos principios, la transformación social y ecológica que proponemos establece ocho objetivos intermedios que tienen la función de monitorear y evaluar el cumplimiento del objetivo general de la transformación. Estos objetivos buscan, además, representar los espacios en que se promueven las modificaciones necesarias para abrir escenarios divergentes. A continuación, se desglosan dichos objetivos y su contenido.

Sustitución del PIB como objetivo de política económica (o al menos su uso complementario con otros indicadores de bienestar)

Esto se ha hecho efectivo en países como Nueva Zelanda con iniciativas para medir indicadores como el “bienestar de la ciudadanía¹³”, condicionará la elaboración de los presupuestos. Nueva Zelanda es el primer país que toma esta medida. Otro ejemplo es Reino Unido, que cuantifica su índice de prosperidad basado en el que creó la OCDE, aunque es solo consultivo y sus resultados no tienen repercusión en la elaboración de los presupuestos estatales.

¹³ “Una herramienta que medirá, según han dicho, varias variables. A saber: pobreza general e infantil, violencia doméstica, salud mental, identidad cultural, medio ambiente, vivienda, vínculos sociales e incluso la rehabilitación de los presos maoríes” (Miguel Trula, 2020, párrafo 3).

Incorporar la idea de bienestar permite modificar la noción de gasto y en su lugar promover la perspectiva de inversión social. Además, puede abrir más oportunidades para una transformación de tipo ideológico y cultural en torno a conceptos dominantes como progreso, desarrollo o crecimiento económico.

Reducción de la huella ecológica (o de los requerimientos totales de materiales per cápita).

Implica la transformación de matriz energética, de la movilidad y la producción de impactos socioambientales que se genera en la actualidad. Además, requiere que se revisen las prácticas productivas, tanto en materia de agronegocios y producción agroindustrial y pecuaria como en las prácticas de consumo industrial e individual.

Reducción del índice de Gini (desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza).

Las desigualdades y su aumento son uno de los principales problemas que se enfrentan en la actualidad. Por eso, la TSE apunta entre sus objetivos una ruta para su reducción. Esta implica reducir la brecha en términos de ingresos, pero a su

vez prácticas que permitan alimentar esta vía en sus condiciones estructurales; por ejemplo, la distribución de la tierra, el acceso al crédito y la disposición de una renta básica universal.

Además, se requieren modificaciones en materia fiscal y tributaria que permitan fortalecer el Estado, su capacidad recaudatoria y en la implementación de políticas sociales desde una “ética del desarrollo” que aporten a reducir las brechas existentes.

Para avanzar este objetivo el enfoque de género es fundamental, ya que las principales desigualdades afectan de manera particular a las mujeres. Por esto, se requiere generar políticas con un enfoque de género transversal que permita, por un lado, hacer visible esta situación y, por otro, propiciar la transformación.

Mantenimiento de un piso de inversión social (salud, sanidad, educación, vivienda, etc.)

Esta responsabilidad debe trascender la visión asistencialista de la política social y permitir el acceso a derechos sociales y económicos a las personas y familias, mediante la promoción de políticas públicas que permitan el acceso al bienestar. Es de fundamental importancia la incorporación de la noción de “bienes comunes” que el Estado debe proteger. Esto para permitir que se vinculen este tipo de servicios con una visión colectivista que promueva su protección ante las tendencias privatizadoras.

Priorizar el trabajo digno y el empleo decente (OIT) (más que la inflación o la productividad).

Debe desarrollarse una política de empleo decente. En la actualidad, esta no existe en Costa Rica. Esa política debe priorizar tanto el trabajo en general como el empleo asalariado o asociativo en particular. Para esto, debe transformarse la forma en que se comprende la economía y, más bien, ponerse al servicio de la vida y las personas, favoreciendo reorganizaciones y reestructuraciones tanto de las relaciones de producción como de la propiedad.

Reducción de la dependencia alimentaria/nutricional/energética

El elemento fundamental es defender la soberanía y seguridad en todos estos temas; pero, además, resolverlos de maneras sustentables. Por esto, elementos como la agroecología, la transformación de la matriz energética, la promoción de la economía circular, entre otros, favorecen avanzar hacia este objetivo. Este adquiere un carácter de urgencia ante el contexto actual y requiere de acciones inmediatas.

Valoración y redistribución del trabajo doméstico y de cuidados

Con miras a promover una sociedad equitativa que disminuya las brechas entre todas las personas, es urgente la generación de transformaciones de todo tipo para reivindicar la corresponsabilidad del cuidado, la redistribución del trabajo no remunerado y la consideración de contar con remuneraciones para el trabajo doméstico.

El tema debe abordarse de manera que permita ser comprendido como la defensa de derechos políticos, sociales y económicos que deberían ser para todas las personas, según la base política de los derechos humanos, que se materializa de manera desigual entre hombres y mujeres.

Elecciones libres y libertad de expresión (medios de comunicación).

La defensa de la democracia pasa por comprender el poder que la construcción cultural representa en los procesos electorales; pero, además, en los imaginarios cotidianos sobre el ejercicio de los poderes estatales. Asimismo, en este sentido, el fortalecimiento de las nociones de autogestión de la ciudadanía y de los territorios cobran peso para fortalecer el ejercicio de la democracia.

En la actualidad uno de los problemas es que se pone por encima de la libertad de expresión la de prensa, que es una libertad de mercado y eso debe modificarse. En este sentido, se debe ampliar la posibilidad de generar espacios para comunicar sobre otras formas de organizar la sociedad. Esto para aportar en el reconocimiento de otras alternativas más allá de los límites de la sociedad actual. Por ello, es fundamental el impulso de plataformas y medios de comunicación alternativos y diversos.

La propuesta temática particular de la transformación social y ecológica para Costa Rica se ha trabajado de manera colectiva en espacios habilitados por la Fundación Friedrich Ebert - Costa Rica y se incorpora en el próximo apartado. Posteriormente, además, se identifican algunas rutas o estrategias de incidencia política para la articulación y avance en los diversos temas planteados.

V.

AGENDA NACIONAL PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL ECOLÓGICA

Como hemos visto en los apartados anteriores, los escenarios que abre la crisis son múltiples y diverso, por lo cual sus consecuencias también lo son. Ante estos escenarios, nos corresponde como personas y como colectivos comprometidos con una sociedad más inclusiva y sustentable posicionar e impulsar una propuesta alternativa en torno a una agenda nacional para la transformación social y ecológica.

Es por este motivo que se busca poner la transformación social y ecológica al servicio de las luchas históricas que estas organizaciones han desarrollado en Costa Rica para la construcción de una sociedad alternativa. Este esfuerzo se constituye en una agenda nacional que represente sus propios intereses y que viabilice los proyectos que desde cada

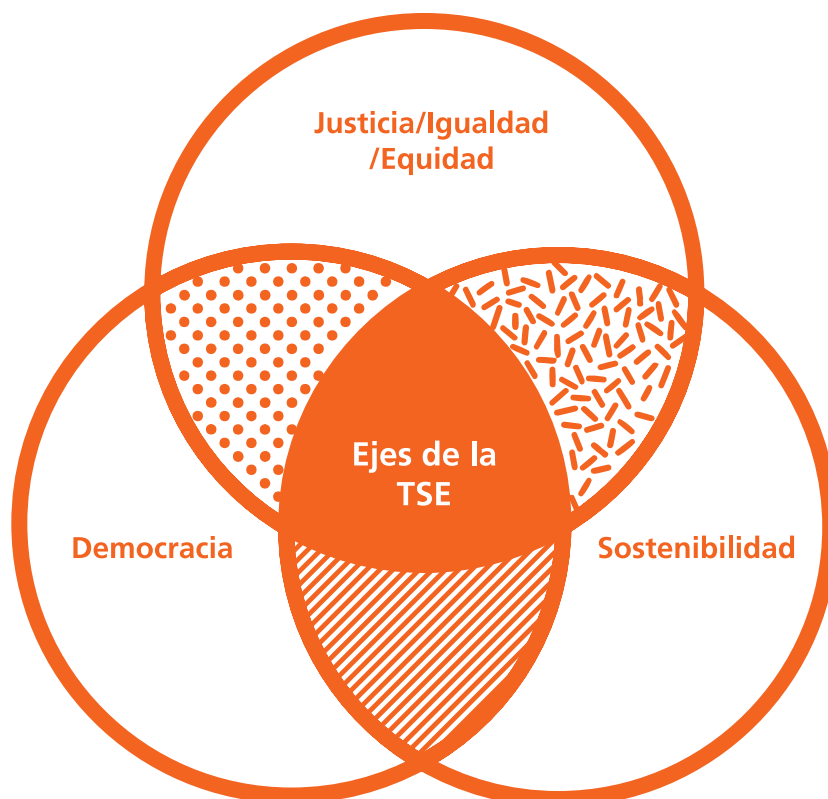
colectivo se consideran esenciales y complementarios a esta agenda.

La propuesta incluye acciones en el corto plazo que reconozcan y deliberen de manera transparente la agenda de la transformación conservadora regresiva en curso. Además, la propuesta de la transformación social y ecológica implica un conjunto de acciones propositivas, que sirve como punto de partida para avanzar hacia una ruta de transformación justa, con equidad social, ambiental y de género.

De esta forma, se establece que los contenidos o temáticas estratégicas se pueden desarrollar en vinculación con tres ejes de políticas y prácticas sociales transformadoras.

Figura 1

Ejes de propuesta: Políticas públicas económicas y ambientales y prácticas sociales para la transformación social y ecológica



Fuente: Elaboración propia, a partir de Mora (2020).

En el plazo inmediato, y de cara a evitar una crisis humanitaria como consecuencia de una mala gestión de las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, la articulación en torno a este proyecto societario debe partir de los preceptos de proteger a las personas que más están siendo afectadas por la crisis, en áreas que posibiliten la defensa de sus derechos humanos. Estos elementos incluyen un compromiso de promover activamente los siguientes objetivos:

1. Garantizar a todas las personas que habitan el territorio nacional el acceso a derechos mínimos como la alimentación, la vivienda y el acceso al agua.
2. Garantizar a todas las personas que habitan el territorio nacional el acceso a la atención médica y hospitalaria, a los tratamientos y avances novedosos que posibiliten la reducción del riesgo de enfermar de gravedad, así como a una eventual vacuna contra el virus SARS COV-2.
3. El fortalecimiento perentorio de la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Salud y demás instituciones abocadas a la atención de la emergencia provocada por la pandemia.
4. Desarrollar una respuesta social e institucional organizada que supere la visión exclusivamente asistencial de la política social, con la participación de los colectivos y movimientos sociales. Lo anterior, sin dejar de lado el fortalecimiento de la articulación y la gestión comunitaria de las respuestas a las múltiples necesidades que surgen de la crisis.
5. Garantizar el financiamiento de estas acciones y otras similares mediante un impuesto solidario a los altos ingresos y a las grandes fortunas de manera inmediata.

Además de los elementos que aportan a la inmediatez de la gestión de la crisis, la agenda para la transformación social y ecológica debe ser contestataria a la agenda conservadora regresiva en marcha. Para esto, se requiere que la agenda incorpore como prioridad elementos que se constituyan como respuestas, pero a su vez que generen alternativas ante: i) la precarización laboral y los cambios regresivos en el mundo del trabajo, ii) la desregulación ambiental y las renovadas propuestas de impulsar el extractivismo (oro, gas, petróleo), iii) el debilitamiento y desmantelamiento institucional (venta de activos), iv) el vaciamiento de la democracia (controles autocráticos frente a la pandemia) y, v) el debilitamiento y la banalización de los derechos humanos (educación, alimentación, vivienda, servicios públicos básicos, diversidad cultural y sexual, pueblos originarios).

Todos estos elementos deben construirse con miras de generar insumos para la disputa por la hegemonía política, ideológica y cultural que está en juego y deben hacerse evidentes para poder avanzar sobre una agenda de transformación social y ecológica.

En este sentido, y con el fin de reflejar una propuesta de agenda para la transformación social y ecológica, los ejes temáticos fueron trabajados en los espacios colectivos desarrollados para la construcción de la agenda. En estos han participado personas de colectivos del sector ambiental, político, agropecuario, de la economía social y solidaria, de movimientos de mujeres, representantes de población indígena, colectivos que defienden la institucionalidad, medios de comunicación alternativa, el sector académico, entre otros.

Se propone que estos contenidos sean abordados a través de temas estratégicos y abordados con acciones y propuestas de corto, mediano y largo plazo, de manera que puedan tener efectos integrales. A partir de estos ejes, se pretenden concretar los objetivos intermedios. En cada uno de los ejes se incorporan propuestas, que, en el caso costarricense, se materializan en los temas planteados por los diversos sectores involucrados en la construcción de la agenda nacional. Aun así, no dejan de ser insumos para una elaboración mayor que permita profundizar en los temas aquí expuestos.

1.
Eje sostenibilidad

**CORTO
PLAZO**

Política ambiental y prácticas sociales alternativas (socio-productivas, comunitarias e individuales) como oportunidades para la reactivación, reconstrucción y transformación económica.

Un modelo alimentario sostenible basado en la agroecología.

Enfrentar el “rebrote” de extractivismo y propiciar la regulación de la expansión de los agro negocios y de otras actividades que representan abiertas amputaciones ambientales.

Transformación de los patrones de consumo (consumo responsable en lo individual).

Conservación de los bienes comunes (parques nacionales y áreas protegidas con participación de las poblaciones rurales circundantes), a través de **turismo rural comunitario** (potencial de granjas agroecológicas) y **apoyo técnico y financiamiento de las Asadas**, resguardando su enfoque asociativo y comunitario.

**MEDIANO
PLAZO**

Economía circular y gestión integral de residuos a lo largo de toda la cadena productiva, distributiva y de consumo: ahorro, eficiencia, renovabilidad de la energía, reutilización de materiales. Especialmente aquella que no se basa en incentivos monetarios espurios.

Turismo rural comunitario: construcción de estrategias conjuntas entre organizaciones que ofrecen servicios de turismo rural, ecológico, comunitario y cultural.

Transformación de patrones de consumo (hiperconsumismo): campaña de consumo responsable y solidario y certificación social solidaria sostenible (identificando y contrarrestando de sus causas impulsoras).

Una **reconversión industrial eco social: ecología industrial y producción limpia** (recuperar las políticas sectoriales activas).

Ordenar y planificar el territorio con criterios de equidad y sostenibilidad y con activa participación de las personas. Resguardo de los derechos de los pueblos originarios.

Ciudades sustentables: energías, transporte, infraestructuras, movilidad, urbanismo.

1.
Eje sostenibilidad

**LARGO
PLAZO**

Transformación de la matriz energética: favorecer energías limpias, renovables, sostenibles.

Justicia energética: gestión integrada de la demanda en el uso de recursos básicos (agua, energía, materiales, movilidad).

Transformación de la matriz productiva y del metabolismo social. Desde lo agroecológico se propone la implantación de biodigestores en producciones pecuarias para la generación de biogás.

2.
Eje justicia social/igualdad/equidad

**CORTO
PLAZO**

Políticas de redistribución de renta y riqueza: profunda reforma fiscal con igualdad de género y tributos verdes.

Seguridad y soberanía alimentaria y nutricional (incluida la pesca sustentable). Fortalecer las redes de distribución y comercialización del sector agroalimentario nacional.

Trabajo digno e ingresos para las familias más afectadas por la crisis (ingreso mínimo vital, avance hacia la **renta básica universal**).

Fortalecimiento de los servicios públicos colectivos (energía, transporte, servicios sociales, educación, sanidad, vivienda, CyT).

Supresión de todas las formas de desigualdad o discriminación a partir de la diferencia.

Aplicación de los derechos de los pueblos originarios, derechos de las personas migrantes, igualdad de derechos entre sexos y géneros.

**MEDIANO
PLAZO**

Políticas de redistribución y reparto de todos los trabajos con perspectiva de equidad de género (economía del tiempo y del cuidado).

Desarrollo local y territorial “desde abajo”.

Política de empleo y trabajo que incluya:

- **Apoyo a los emprendimientos**, especialmente de base asociativa (**EESS**): capacitación, mercadeo y canales de comercialización.
- Promover el empleo con criterio de **encadenamientos productivos** y elasticidad producto-empleo.
- Defensa y promoción de los **derechos laborales**.
- Preparación frente al **“futuro del trabajo”**.

**LARGO
PLAZO**

Una macroeconomía del desarrollo que considere criterios distributivos, igualdad y escala; no centrada en metas inflacionarias.

Una sociedad orientada por el cumplimiento efectivo de los derechos humanos.

Una “economía para la vida” que supere el principalismo en las formas de propiedad y el mercado-centrismo del capitalismo dominante.

3.

Eje democracia económica y social

CORTO PLAZO	Defensa del Estado social y promoción de una reforma fiscal progresiva.
	Promoción de la Economía Social y, en especial, de la Economía Eco Social y Solidaria (EESS) .
	Democratización del acceso al sistema financiero: recuperación o reorientación de la banca pública en cuanto institución al servicio del desarrollo.
	Servicios públicos universales y de alta calidad (salud, educación, vivienda, recreación).
	Reconocimiento e impulso al trabajo de cuidados (remunerado y no remunerado).
	Condonación de la deuda pública externa o una parte de esta.
MEDIANO PLAZO	Recuperación de lo público: capacidades regulatorias y de planificación en sectores estratégicos y frente a los principales desequilibrios socioeconómicos y territoriales.
	Redistribución de la carga del trabajo de cuidados no remunerados en el hogar y la comunidad.
	Democratización de los medios de comunicación y la libertad de expresión.
	Innovaciones democráticas desde abajo en las decisiones económicas, políticas, sociales, ambientales, laborales.
	Diálogo social como cultura ciudadana y con mecanismos efectivos de seguimiento y fiscalización.
LARGO PLAZO	Cambios profundos hacia una "democracia real" , cultura política de transparencia y rendición de cuentas.
	Pluralidad en los regímenes de propiedad y en la gestión empresarial.
	Gobernanza y seguridad regionales y mundiales.
	Control democrático del poder económico capitalista transnacional.
	Democratización del acceso al conocimiento en el marco de I+I+D.

De todos los elementos mencionados, se considera necesario impulsar de manera inmediata, para hacer frente a las tendencias conservadoras regresivas propuestas y a una potencial crisis humanitaria acciones que permitan lo siguiente:

1. La defensa del Estado social, sus instituciones y la promoción de una radical reforma fiscal progresiva.
2. Un impuesto solidario que permita financiar las ayudas a las personas desempleadas y en condición de pobreza y que suministre recursos adicionales a la CCSS.
3. La defensa del trabajo y del empleo como un derecho y de la autonomía económica de las familias, mediante la generación de oportunidades de trabajo digno y políticas sociales complementarias, no condicionadas.
4. Impulsar la política de protección ambiental como oportunidad de reactivación económica. Mediante una estrategia donde la economía social solidaria y la defensa de la soberanía alimentaria se articulen.
5. Identificar y denunciar las prácticas de “disciplinamiento” frente a la pandemia que conduzcan a controles autoritarios sobre la población y que criminalicen el derecho humano a la protesta social.

VI.

ESTRATEGIA DE INCIDENCIA E IMPLEMENTACIÓN

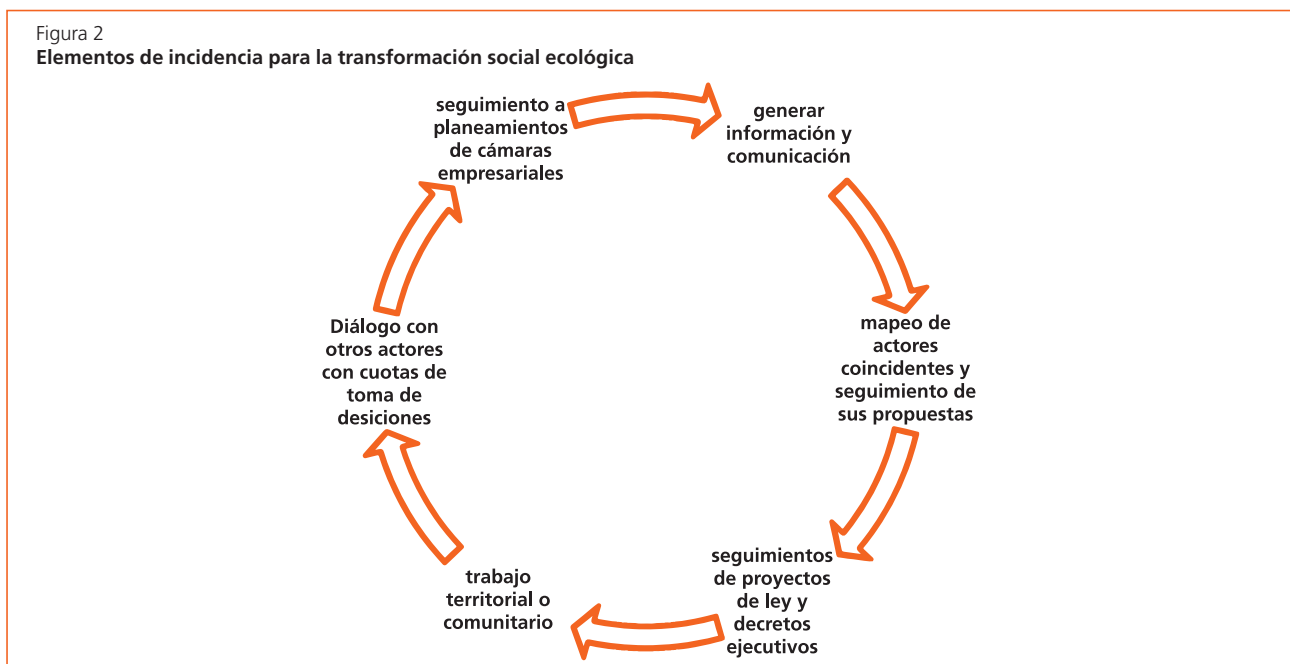
En una época de retracción de derechos, la estrategia debe ser a la vez defensiva y propositiva, similar a como se estableció la agenda en el apartado anterior. De esta manera, un primer momento implica el compromiso para desarrollar acciones que aporten a evitar una crisis humanitaria como consecuencia de la inacción ante la pandemia. Esto implica que se explicita este escenario como una amenaza real, así como evidenciar que existen riesgos de que, a través de las medidas que se vienen implementando, se afecte a grandes sectores de la población. Esto requiere por lo tanto que se socialice información, datos, proyecciones de las afectaciones que esta situación está teniendo y que tendrá en el corto plazo para gran cantidad de personas y familias en el país y la región.

En este escenario, es de fundamental importancia identificar las oportunidades que la salida a la crisis pueda tener para una propuesta de transformación social y ecológica, construyendo narrativas y discursos que establezcan sentidos comunes que generen tejido social y oportunidades de articulación a su alrededor. En este sentido, siguiendo las ideas planteadas por Castro (2020) existen oportunidades dentro de las que se rescatan las siguientes:

- Incapacidad de recetas viejas para hacer frente a la crisis y que, por el contrario, profundizan sus impactos sociales y económicos.
- Constatación de la importancia estratégica de los servicios y el empleo público, frente a la ineficacia e indiferencia de los servicios privados (en salud, universidades, etc.).
- Constatación de la importancia de la soberanía alimentaria.
- Colocación en la agenda pública de la necesidad (a nivel planetario) de garantizar un ingreso mínimo universal.

Aprovechando las oportunidades del contexto, la estrategia debe tener un segundo momento que permita identificar y resistir la agenda de transformación regresiva. Ya se han señalado los primeros elementos en ese proceso; pero debe ser complementado por tareas más concretas, que incluyen los elementos de incidencia para la transformación social y ecológica (Figura 2).

- Un discurso mundial contrario al modelo hegemónico.



Este proceso debe acompañarse de acciones que aporten a identificar factores políticos, culturales e ideológicos que instituyan un sentido común de conservación del estatus quo, el cual permita generar acciones para contrarrestar esta tendencia en la disputa por la hegemonía cultural en curso.

Para esto, se requiere de una fuerte presencia comunicativa, la cual se considera debe darse a partir de la creación de espacios alternativos, en lugar de apelar a solo tener voz en los medios tradicionales. Para lograrlo, la autonomía comunicativa debe defenderse y promoverse, fortaleciendo procesos de articulación en torno a construir una conciencia colectiva que se vaya posicionando en las oportunidades que brinda la transformación social y ecológica a partir de sus ejes estratégicos.

Una de las acciones que permite avanzar en esta tarea es fortalecer el reconocimiento de las prácticas que son semilleros para la TSE y que ya existen en Costa Rica. Esto aporta a la construcción de escenarios alternativos y simbólicos que potencian el reconocimiento de la TSE como una propuesta colectiva y abarcadora de oportunidades para estos sectores y prácticas sociales. La articulación de sectores que representan la economía social y solidaria, los derechos de las poblaciones originarias o las prácticas de agroecología son vivos ejemplos de lo anterior.

Respecto a la estructura que organice el trabajo de impulso a la agenda, el elemento central es la necesidad de conglomerar y articular la activa participación de múltiples agentes diversos y con intereses no necesariamente coincidentes. Para esto se propone la conformación de un frente común y diverso, que incorpore el contenido de las agendas sectoriales; pero que permita ir más allá, logrando acuerdos y compromisos de los diversos actores sociales involucrados. Asimismo, que aporte en sus procesos particulares; pero que acuerpe las luchas de otros sectores que también propugnan por una sociedad equitativa y que promueva la sustentabilidad de la vida.

Otro elemento central de la estrategia implica la búsqueda y construcción de “intereses generalizables” entre la diversidad de actores, lo que podemos llamar: “unidad por la diversidad”. Un aspecto que puede brindar oportunidades en este sentido es la reivindicación de la noción de defensa de la democracia y el Estado social costarricense, que implica hacer referencia a la categoría de ciudadanía y a la articulación en torno a esta. En este sentido, la agenda nacional para la transformación social y ecológica es una vía para consolidar ese proyecto alternativo de sociedad desde los criterios de justicia social, equidad, democracia y sostenibilidad.

Otro hecho que permitirá generar vinculación permanente de actores y sectores diversos será la posibilidad de que la agenda cuente con una base de contenidos generales, pero abierta a discusión permanente. Por lo cual, se propone la conformación de equipos de análisis y de construcción de propuestas para contrarrestar los peligros de impulsar una agenda previamente definida desde una posición de jerarquías establecidas a priori. Para esto, se propone trabajar en núcleos temáticos en diversos espacios que retroalimenten

la agenda, mediante reflexiones o evidenciando vacíos y propuestas para solventarlos.

Con el fin de guiar el proceso de manera articuladora, se propone la conformación de un núcleo dinamizador de la propuesta. Cada persona participante de este núcleo promoverá en los espacios de organización en que participa el reconocimiento de la agenda nacional para la TSE como una oportunidad para el proyecto societario que represente sus intereses. De esta forma, se busca generar procesos formativos y educativos para la transformación social y ecológica.

En este sentido, la labor de las organizaciones de base y desde los territorios es fundamental para que la propuesta de la agenda para la TSE pueda ser acogida de forma que represente las necesidades sentidas y cotidianas por la población. Por este motivo, se considera que la conformación de pequeños grupos de discusión locales o regionales aporta a la apropiación de la agenda por los diversos sectores sociales. Se hace referencia a la experiencia exitosa de los comités patrióticos contra el TLC, sin embargo, queda la necesidad de definir cómo abordar la complejidad de una transformación como la que se propone, a diferencia de participar de un proceso de elección popular.

Debe continuar trabajándose en la articulación e identificación de actores y sectores en torno a la TSE. Si bien, ya se ha realizado un primer proceso de mapeo y vinculación de actores, es necesario que se profundice no solamente en términos de la agenda como un todo, sino de sus ejes o temas concretos, para identificar rutas precisas y posibles.

Se abren oportunidades específicas, según se ha planteado en el proceso, a partir de la articulación y el diálogo entre sectores ecologistas, de la economía social y solidaria y sindicatos; por ejemplo: “la posibilidad de plantear que las organizaciones sindicales del sector público se vinculen y apoyen las cadenas cortas de comercialización de productores nacionales y los esfuerzos de economía social y asociativa desde el nivel local. Es decir, representan una importante capacidad de consumo que puede ser dirigida de forma directa a cadenas solidarias de comercialización” (Castro, 2020a, p. 6).

Además de las cuestiones de estructura organizativa, se debe buscar articular estrategias que aprovechen discursos legitimados social y hegemonícamente en la actualidad. En este sentido, se considera que una oportunidad es establecer vínculos sinérgicos entre la agenda TSE y la agenda 2030, pues podría permitir fortalecer alianzas con sectores público y sindical al incorporar sus intereses en la propuesta. Otro elemento estratégico que aporta en este sentido es aprovechar como vocerías de la TSE a personas que cuenten con reconocimiento y experiencia profesional en el ámbito nacional e internacional en temas de sostenibilidad, cambio climático, entre otros y que aporten para visibilizar la necesidad de colocar los temas que la TSE propone en la agenda pública.

Además, se considera estratégica la identificación de pequeñas reformas que apalanquen resultados de gran impacto. Esto requiere que se analicen los temas propuestos en los ejes de la agenda y se establezcan rutas de incidencia, así como la necesidad de identificar reformas institucionales y constitucionales que permitan movilizar voluntades y generar oportunidades de cambio para favorecer las reformas.

Por otro lado, además de los elementos de política pública y legislación, se requiere promover innovaciones y prácticas sociales transformadoras. En este sentido, se insiste en la necesidad de fomentar la autogestión de los movimientos sociales, reconociendo la importancia de los apoyos del Estado, pero no dependiendo únicamente de estos. Por este motivo, se considera que debe promoverse el fortalecimiento de las prácticas que son transformadoras y se encuentran en desarrollo en territorios particulares y de manera diversa.

Respecto a la estrategia de incidencia a nivel del gobierno, se ha planteado que debe buscarse la posibilidad de que el Poder Ejecutivo abra espacios de diálogo y concertación "reales" que permitan que la TSE tenga cabida en la agenda pública. Tanto en esta esfera como en el poder legislativo, se considera que los actores vinculados con la TSE deben construir la capacidad de comunicar el costo social y político de no implementarla. Se considera que una ruta es usar datos para hablar de estos costos y de la inacción en el tema.

No solo se identifican retos en el contexto, sino que, a nivel de las debilidades que complejizan estos procesos, debe contenerse la tendencia a la confrontación y actitud poco solidaria y constructiva. Características tan instituidas en la ideología del sistema de relaciones sociales vigente y que se permea hasta las estructuras de las organizaciones y movimientos sociales.

No será posible avanzar en una agenda de carácter articulador si los sectores que representan algunos de los elementos contenidos en dicha agenda no se comprometen a apoyar los temas que son de interés para otros sectores vinculados, a partir de la conformación de un frente común.

De esta forma, se requiere que se construya una visión colectiva con una noción de urgencia, donde se visibilice la necesidad de que los intereses comunes superen a los intereses personalistas o sectoriales. Este elemento ha dificultado procesos de articulación de este tipo en el pasado, según las mismas personas de los colectivos participantes de este proceso.

Por otro lado, existen experiencias exitosas donde el tejido social se ha articulado para llevar adelante importantes luchas sociales en Costa Rica, como la lucha contra ALCOA en la década de 1970, la lucha contra el Combo ICE, la lucha contra el TLC, la lucha contra la minería en Crucitas, por la defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social, ante la reforma fiscal conservadora, entre otras luchas que han mostrado las potencialidades que tiene la organización social por la defensa de los intereses comunes.

BIBLIOGRAFÍA

- Alfaro Redondo, R. y Vargas Cullell, J. (2020).** ¿Acabará la pandemia con la estabilidad política de la democracia costarricense? Programa Estado de la Nación. Disponible en <https://estadonacion.or.cr/acabara-la-pandemia-con-la-estabilidad-politica-de-la-democracia-costarricense/>
- Antunes, R. (2020).** Cómo se desarrolla la 'uberización' total del trabajo. La Haine. Disponible en <https://www.lahaine.org/mundo.php/como-se-desarrolla-la-uberizacion>
- Bihr, A. (25 de abril de 2020).** Tres escenarios para explorar posibilidades en el horizonte después de la crisis del Covid-19. Sin Permiso. Disponible en <https://www.sinpermiso.info/textos/tres-escenarios-para-explorar-posibilidades-en-el-horizonte-despues-de-la-tesis-del-covid-19>
- Bourg, D., Desbrosses, P., Chapelle, G., Chapoutot, J., Lanata, X. R., Servigne, P. y Swaton, S. (2 de mayo de 2020).** Propuesta para un retorno a Tierra. La Pensée Écologique. Disponible en <http://lapenseeecologique.com/propuestas-para-un-retorno-a-tierra/#prettyPhoto>
- Burchardt, H.J. (abril de 2020, abril).** Propuestas realistas para que la época del coronavirus sea la del cambio. Nueva Sociedad. https://nuso.org/articulo/coronavirus-futuro-propuestas-cambio/?utm_source=email&utm_medium=email
- Castro, M. (2020).** Podemos prender las luces largas. ¿qué podemos hacer? ¿cómo? ¿qué oportunidades y limitaciones tenemos en la actual coyuntura?. San José, Costa Rica. Documento inédito
- Castro, M. (2020a).** ¿Poco de qué asombrarse? ¿Cómo nos repensamos de cara a un bicentenario que nadie imaginó? San José, Costa Rica. Documento inédito
- Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) (2020).** Informe de Resultados del Estudio de Opinión Sociopolítica. Disponible en <http://d1qq-tien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/08/Informe-de-resultados-del-Estudio-de-Opini%C3%B3n-Sociopol%C3%ADtica-agosto-2020.pdf>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2020).** Observatorio COVID-19 en América Latina y El Caribe. Impacto económico y social. CEPAL. https://www.cepal.org/es/temas/covid-19?utm_source=CiviCRM&utm_medium=email&utm_campaign=20200422_segundo_informe_covid19
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2020a).** La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el nuevo contexto mundial y regional: escenarios y proyecciones en la presente crisis. Disponible en: <https://www.cepal.org/es/publicaciones/45336-la-agenda-2030-desarrollo-sostenible-nuevo-contexto-mundial-regional-escenarios>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2020b).** COVID-19 Informe Especial N° 5. Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45782/1/S2000471_es.pdf
- Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. (2020).** Pensar la Pandemia. Buenos Aires, Argentina: CLACSO. <https://www.clacso.org/pensar-la-pandemia-observatorio-social-del-coronavirus/>
- De Lisio, A. (7 de mayo de 2020).** Emergencia: sociedad, ambiente y economía. Una oportunidad para el TSE. Friedrich Ebert Stiftung-Transformación. <https://www.fes-transformacion.org/e/emergencia-sociedad-ambiente-y-economia-una-oportunidad-para-la-tse/>
- Díaz Zeledón, N. (24 de junio de 2020).** Dos planes proponen impuesto de renta a los ricos mientras mayoría pide recortes. Semanario Universidad. <https://semanariouniversidad.com/pais/dos-planes-proponen-impuesto-de-renta-a-los-ricos-mientras-mayoria-pide-recortes/?fbclid=IwAR0e-3hOvpiftvNXhRmBvDKyZaxfaQ1WrARGB1Lfy8mXFbKYwxsUXGj5qLXM>
- Fundación Friedrich Ebert. (23 de abril de 2020).** Síntesis de conversatorio. En Red Transformación Social-Ecológica Regional. Conversatorio virtual llevado a cabo por medio de la plataforma Zoom.
- Fundación Friedrich Ebert - Observatorio Económico y Social (UNA). (2020).** Vencer la COVID-19, sin colapsar la economía y protegiendo prioritariamente a los más vulnerables. San José, Costa Rica. Documento inédito.
- Fundación Friedrich Ebert.** Biblioteca Transformación. Proyecto Regional Transformación Social Ecológica. Ciudad de México.
- Gibb, R., Redding, D.W., Chin, K.Q., Donnelly, C.A., Blackburn, T., Newbold, T & Jones, K. (2020).** Zoonotic host diversity increases in human-dominated ecosystems. Nature, 584, 398-402. Disponible en <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2562-8>
- Grupo Economía Pluralista. (24 de abril de 2020).** Carta abierta al presidente: Tiempos excepcionales demandan respuestas excepcionales. Semanario Universidad. Disponible en <https://semanariouniversidad.com/opinion/carta-abierta-al-presidente-tiempos-excepcionales-demandan-respuestas-excepcionales/>
- Grupo Economía Pluralista. (25 de junio de 2020).** Urge replantear la estrategia económica frente a la crisis del COVID-19. Semanario Universidad. <https://semanariouniversidad.com/opinion/urge-replantear-la-estrategia-economica-frente-a-la-tesis-del-covid-19/?fbclid=IwAR2W1RZ1GtuR-9QM6KJ3AFsXvkGh18g7Gps5xqT-Zh2KmUxwfm4s1Cz9OcjQ>
- Harvey, D. (2020).** Razones para ser anticapitalistas. Disponible en: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20200430034259/Razones-para-ser-anticapitalistas.pdf>
- Hinkelammert, F. (16 de junio de 2020).** Por una condonación de la deuda pública externa de América Latina. El País.cr. Disponible en: <https://www.elpais.cr/2020/06/16/por-una-condonacion-de-la-deuda-publica-externa-de-america-latina/>
- Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2020).** Encuesta Continua de Empleo, trimestre móvil Abril-Mayo-Junio 2020 Disponible en: <https://www.inec.cr/sites/default/files/documentos-biblioteca-virtual/reeciiit2020.pdf>
- Jiménez Fontana, P., Morales Aguilar, N. y Segura Carmona, R. (2020).** Las desigualdades que enfrentan los hogares en cuarentena. Programa Estado de la Nación. <https://estadonacion.or.cr/las-desigualdades-que-enfrentan-los-hogares-en-cuarentena/?fbclid=IwAR3F67aTUz57XYC-HusWxcwV-qhHav47UCYoJuLiBI7gikDvVXp6KJkin30>
- Miguel Trula, E. (21 de mayo de 2020).** El PIB es un instrumento de medición de la prosperidad desfasado. Y por eso Nueva Zelanda va a abandonarlo. Magnet. <https://magnet.xataka.com/un-mundo-fascinante/pib-instrumento-medicion-prosperidad-desfasado-eso-nueva-zelanda-va-a-abandonarlo>
- Mora, H. (2020).** Transformación Social-Ecológica: Alternativas al desarrollo y al sostenibilismo en América Latina. San José, Costa Rica: Fundación Friedrich Ebert- Observatorio Económico y Social (UNA). Documento inédito.
- Organización Internacional del Trabajo. (2020).** Observatorio de la OIT: La COVID-19 y el mundo del trabajo. Quinta edición. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_749470.pdf
- Pacto Ecosocial del Sur (2020).** Inicio. Pacto Ecosocial del Sur. Disponible en <http://pactoecosocialdelsur.com/>

LISTA DE FIGURAS

- 19 Figura 1
Ejes de propuesta: Políticas públicas económicas y ambientales y prácticas sociales para la transformación social y ecológica
- 25 Figura 2
Elementos de incidencia para la transformación social ecológica

ACERCA DE LOS AUTORES

Laura Rivera Alfaro. Trabajadora Social y Abogada. Se ha desempeñado en organizaciones sociales, en docencia e investigación universitaria. Actualmente, es consultora independiente interesada en promover la justicia social con perspectiva de género y la defensa de la naturaleza.

E-mail: lau.riveralfaro@gmail.com

Linkedin: <https://www.linkedin.com/in/laura-rivera-b12425142>

Henry Mora Jiménez. Economista. Profesor e investigador en la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Costa Rica (ESE-UNA). Miembro de la Red Latinoamericana de Transformación Social Ecológica.

IMPRESIÓN

Friedrich Ebert Stiftung FES
(Fundación Friedrich Ebert)
San José | Costa Rica

Responsable:
Mirko Hempel
Representante Fundación Friedrich Ebert para Costa Rica,
El Salvador y Panamá
Tel.: +506 2296 0736
costarica@fesamericacentral.org

Marco Zamora
Coordinador de Proyectos
m.zamora@fesamericacentral.org

SOBRE ESTE PROYECTO

En 1965 la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES, Fundación Friedrich Ebert) abre en Costa Rica su primera oficina en la región centroamericana. El 23 de julio de 1965 se firma el Convenio de Cooperación entre el Gobierno de Alemania y el Gobierno de Costa Rica. El 1° de setiembre de 1980 se aprueba la Ley no.6454 que lo ratifica. Por más de 55 años la Fundación en Costa Rica ha desarrollado sus actividades como plataforma de diálogo, análisis político y de asesoría política. La participación de múltiples actores y el fortalecimiento de la democracia social son bases de la cooperación realizada con instituciones sociales y políticas costarricenses.

En la actualidad, la Fundación Friedrich Ebert, a través de su oficina en Costa Rica, desarrolla los dos proyectos de trabajo regional de la FES en América Central. Por un lado, El Proyecto Transformación Social Ecológica, que

busca contribuir al fortalecimiento de las capacidades de gobierno democrático y social, aportar contenidos y apoyar diálogos hacia una economía social y ecológicamente sostenible, elaborar propuestas de modelos de desarrollo alternativo, y una política fiscal como instrumento de justicia social y de igualdad de género. Por otro lado, el Proyecto Juventudes Progresistas, que ofrece espacios de formación y fortalecimiento de liderazgos en las juventudes, e impulsar estos liderazgos para participar de manera más efectiva en proceso de defensa de la democracia y los Derechos Humanos.

El concepto de planificación y las actividades de la FES en red de las seis oficinas centroamericanas consiste en la coordinación, el intercambio y la articulación regional con implementación nacional.

Para más información, consulte
[http:// www.fesamericacentral.org](http://www.fesamericacentral.org)

ISSN
2413-6611

TRANSFORMACIÓN SOCIAL ECOLÓGICA EN COSTA RICA

Implicaciones sociopolíticas y económicas del covid-19



La agenda nacional para la transformación social ecológica es el resultado de un proceso entre múltiples actores que ha permitido generar una base informativa con las prácticas cotidianas de diversos sectores.

Además de temas relevantes, se identifican espacios de alianza y elementos de estrategia para la incidencia política en los distintos niveles institucionales, ampliar la programática y la viabilidad política de las propuestas.



Con el fin de abordar esta propuesta desde una perspectiva amplia, el texto se introduce con un análisis de contexto, así como de las tendencias actuales para afrontar las crisis sanitaria, social y económica del covid-19.



La intención es evidenciar la posibilidad de transformación y la viabilidad de alternativas ante las afectaciones que una agenda conservadora regresiva tiene en detrimento de los derechos humanos y de la naturaleza.

Más información sobre el tema está disponible aquí:
<https://www.fesamericacentral.org>